



La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de las cláusulas contenidas en el documento que adjunta para recabar el consentimiento de los colegiados.

Con carácter general, en lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal, entre las obligaciones del responsable del fichero, en el presente caso el Colegio profesional consultante, está la de obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento o cesión de sus datos y la de informarle sobre los derechos que le asisten, así como sobre la identidad y dirección del responsable y sobre el uso que se va a dar a esos datos.

En este sentido, tal y como dispone el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 *"El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa"*. No obstante, el número segundo de dicho artículo establece determinadas excepciones a la necesidad de dicho consentimiento, excepciones que, en lo que aquí interesa, quedan reducidas a los siguientes supuestos de los previstos en dicho artículo: *"No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias"* y *"cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación comercial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento"*.

En el caso de que la prestación del consentimiento sea exigible, éste deberá ser, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 h) de la Ley Orgánica 15/1999 *"libre, inequívoco, específico e informado"*, debiendo, en consecuencia, aparecer vinculado a las finalidades determinadas, específicas y legítimas que justifican el tratamiento de los datos, de manera que los datos únicamente podrán ser tratados en el ámbito de las mencionadas finalidades, tal y como dispone el artículo 4.1 de la misma norma, no pudiendo ser tratados para fines incompatibles con aquéllas (artículo 4.2 de la misma Ley).

La manifestación de los requisitos legalmente exigidos al consentimiento del afectado se realiza en la práctica a través de la información al afectado, en el momento de la recogida de sus datos de carácter personal, de los extremos esenciales relacionados con el tratamiento, recabando a tal efecto su consentimiento en relación con los aspectos específica e inequívocamente hechos constar en la mencionada información.

El deber de información al afectado aparece regulado en la Ley Orgánica 15/1999 por su artículo 5, cuyo apartado 1, aplicable al supuesto de recogida de datos del propio afectado, como sucedería en el caso descrito en la consulta, establece que *“Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:*

*a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.*

*b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.*

*c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.*

*d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.*

*e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.”*

En aplicación de lo anteriormente señalado al presente caso cabe señalar que en el documento aportado se encuentran dos tipos de cláusulas, la primera de ellas, constituye una cláusula informativa sobre aquel tratamiento de datos para el que no es preciso el consentimiento del interesado, en virtud de lo señalado en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, sin perjuicio de que deba cumplirse el deber de información previsto en el artículo 5.

Así en el primer párrafo del documento se da cuenta de la existencia de un tratamiento de datos personales, con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de las funciones públicas y la gestión del colegio. Respecto de esta cláusula informativa cabe hacer las siguientes consideraciones ya que no se cumplen plenamente los requisitos contenidos en el citado artículo 5.1 de la Ley:

En primer lugar, de la literalidad de la cláusula, se deduce que el responsable del fichero es el Colegio consultante, no obstante, en su redacción no figura la palabra responsable del fichero, lo que resultaría conveniente a los solos efectos informativos y aclaratorios para los colegiados.

En segundo lugar, no se indica en relación con aquellos tratamientos relativos al desarrollo de las funciones públicas, las posibles cesiones de datos vinculadas al cumplimiento de las finalidades encomendadas a dicho Colegio.

En los siguientes párrafos se contienen diversas solicitudes de consentimiento para el tratamiento y cesión de datos del afectado, en relación a las cuales cabe señalar lo siguiente:

En el segundo párrafo se contiene una solicitud de consentimiento *“para el tratamiento de los datos del colegiado con la finalidad de informarle de actividades que se organicen que puedan ser de su interés”*. Dado que este tratamiento no forma parte ni de las funciones propias ni de la gestión del Colegio, sino que trata de actividades voluntarias para sus colegiados, debería habilitarse, al igual que se hace en el mismo documento para otras solicitudes de consentimiento, la posibilidad de manifestar su negativa al tratamiento, pudiendo realizarse de la misma forma mediante la marcación de una casilla.

Por último, en relación con el consentimiento para el tratamiento de datos para actividades publicitarias dispone el artículo 45.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que *“Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así como quienes realicen estas actividades con el fin de comercializar sus propios productos o servicios o los de terceros, sólo podrán utilizar nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:*

*(...)*

*b) Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento para finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial, habiéndose informado a los interesados sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.”*

Por consiguiente, para que la cláusula en la que se solicita el consentimiento para el envío de publicidad a través del colegio sea conforme a lo previsto en la normativa de protección de datos, deberá modificarse precisando los sectores específicos y concretos de actividad a que va a referirse dicha publicidad. Por otra parte, el Colegio consultante quedará vinculado por el alcance de dicha cláusula, una vez adaptada a las exigencias del precepto transcrito, de forma que precisará de un nuevo consentimiento informado del afectado para que sea lícito el tratamiento de datos con fines publicitarios para un sector diferente de aquellos fijados en la nueva cláusula.

Por su parte, el artículo 49 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, relativo a los ficheros comunes de exclusión del envío de comunicaciones comerciales (los conocidos tradicionalmente como “listas Robinson”) dispone en su número segundo que *“Cuando el afectado manifieste ante un concreto responsable su negativa u oposición a que sus datos sean tratados con fines de publicidad o prospección comercial, aquél deberá ser informado de la existencia de los ficheros comunes de exclusión generales o sectoriales, así como de la identidad de su responsable, su domicilio y la finalidad del tratamiento.”* Por tanto, el consultante deberá no solo adoptar las

medidas que eviten el envío de comunicaciones comerciales por su parte, sino que deberá informar al afectado sobre la existencia de ficheros comunes de exclusión generales o sectoriales en los términos previstos en el precepto transcrito.

Además, el número cuarto del mismo artículo 49 establece que *“Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial deberán previamente consultar los ficheros comunes que pudieran afectar a su actuación, a fin de evitar que sean objeto de tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a ese tratamiento.”* En consecuencia, el consultante deberá adecuar su actividad a lo previsto en dicho artículo realizando, en cada caso las correspondientes consultas a los ficheros comunes existentes.